EL NEOLIBERALISMO, O EL CAMINO DEL INFIERNO

Por Lácides Martínez Ávila*

No hay quizá metáfora más precisa para comparar el fenómeno del neoliberalismo, o capitalismo salvaje, que la utilizada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías: “El camino del infierno”.

Los expertos y economistas de mejores dotes —es decir, aquellos que, además de sus conocimientos tecnocientíficos, poseen sensibilidad humana y conciencia social— coinciden en señalar al neoliberalismo como un fenómeno implacablemente dañino para los sectores más amplios de la sociedad en cualquier país donde se aplique.

Aun dentro de los Estados Unidos, país que con mayor ahínco lo promueve, este modelo de desarrollo ha profundizado la brecha social entre ricos y pobres. Así lo han reconocido algunos estudios dados a conocer en esa nación.

El error fundamental del neoliberalismo radica en circunscribir el desarrollo de las naciones al mero crecimiento económico de las mismas, dejando de lado otras esferas del desarrollo tanto o más importantes que la economía. No se debe olvidar que así como en la vida de una persona el dinero no lo es todo, tampoco lo son las riquezas materiales en la vida de una nación.

No es que se pretenda desconocer aquí la importancia de la economía y de los bienes materiales en la vida de un pueblo; pero debe quedar claro que es una aberración hacer de ellos el fin último o el bien supremo de la sociedad, como al parecer lo hacen los idólatras de la economía al servicio del neoliberalismo.

Pero hay algo más aberrante todavía: en un sistema neoliberal las políticas económicas y la economía misma no están orientadas a favorecer al pueblo, sino a las clases sociales más opulentas y a las grandes empresas multinacionales.

Cosa parecida ocurre, en este sistema, con la democracia, que tanto dice defender. Ésta no pasa de ser más que una plutocracia oligárquica contraria a los intereses y necesidades del pueblo y al servicio exclusivo de la clase capitalista dominante.

De ahí que los apologistas del neoliberalismo se empeñen tanto en hacer ver la democracia —o mejor, lo que ellos llaman democracia— como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar la felicidad de la nación. Intentan ocultar la realidad de que ninguna forma de gobierno es sana si no beneficia a la mayoría de la población, y viceversa.

El neoliberalismo se suele valer de argumentos falaces con apariencia de verdaderos. El más general de ellos es el de la “modernización del Estado”. Se pretende convencer, con este argumento, a la opinión pública de que lo que se busca es un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia del Estado para beneficio de la comunidad, cuando lo que en realidad se está haciendo es, sencilla y llanamente, adecuar el aparato estatal a los intereses y exigencias de las élites económicas y financieras dominantes, tanto nacionales como internacionales. Este propósito se lleva a cabo mediante el debilitamiento sistemático del Estado central, reduciéndole sus competencias y eximiéndolo de sus responsabilidades sociales.

Tres grandes estrategias utilizael neoliberalismo: la globalización, la privatización y la descentralización.

La globalización se nos presenta como un proceso irreversible e incontenible, conducente a hacer del mundo una aldea para beneficio y comodidad de todos. Sin embargo, otros son los verdaderos propósitos de quienes la promueven e intentan imponer. La globalización sería algo bueno para todos si la animara el mismo ideal del cosmopolitismo que propusieron los filósofos de la antigüedad clásica y que no era otro que el de convertir a todos los hombres en ciudadanos del mundo, con un criterio de igualdad y respeto recíprocos. Pero intenciones muy distintas son las que abrigan los corazones de quienes defienden e impulsan la globalización actual, cuya finalidad no tiene nada de filosófico ni de ético, sino que es eminentemente económica y comercial. Su mayor empeño es implantar la llamada apertura económica, o política de libre mercado.

Esta política librecambista ha venido siendo impuesta por parte de las grandes potencias industriales, con los Estados Unidos a la cabeza, a los demás países, particularmente a los del Tercer Mundo, con el único fin de ensanchar sus propios mercados y evitar así posibles crisis de sobreproducción internas. Lo malo de esta política es que dichas potencias la aplican con proficiencia y ventajismo, pues, mientras a los demás países les exigen abrir sus fronteras de manera irrestricta al comercio internacional, ellas en cambio conservan políticas de protección para muchos de sus productos, reservándose la potestad de aceptar o rechazar la importación de los mismos. ¡La típica Ley del Embudo!

Tal es el injusto juego al que mandatarios latinoamericanos como colombiano Ernesto Samper, en su momento, el venezolano Hugo Chávez y muchos otros, en la actualidad, se resisten a seguir, prefiriendo granjearse las malquerencias gringas que someterse a semejante forma de vasallaje neocolonial.

Los colombianos ya tuvimos en el siglo XIX una experiencia amarga a este respeto, cuando, mediante la llamada Revolución del Medio Siglo, se impuso la política librecambista de los *gólgotas* (comerciantes) sobre la política proteccionista de los *draconianos* (artesanos). Ello trajo como consecuencia la quiebra de la incipiente industria manufacturera, por cuanto nuestro mercado interno se copó de productos ingleses elaborados tecnológicamente, con los cuales nuestros productos artesanales o manufacturados no pudieron competir, lo que ocasionó su ruina.

Hoy en día, el lugar de los artesanos o manufactureros del siglo XIX lo ocupan los empresarios o industriales comunes y corrientes, que no hacen parte de los grandes monopolios multinacionales ni de las más altas élites económicas, sin que ello quiera decir que no sean ricos. Estos empresarios, que constituyen la mayoría del sector productivo, sufrirán también con gran rigor, no hay duda, los embates asoladores del neoliberalismo salvaje, y muchos de ellos tendrán que cerrar sus empresas ante la competencia despiadada de los productos extranjeros, trayendo como consecuencia mayor desempleo y drama social.

La descripción más cruda y descarnada, pero exacta, que he podido apreciar de la globalización es la que dio el venezolano Axel Capriles M. en el diario "El Universal", de Caracas, el 10 de febrero de 2.000: *"Es una malévola conjura de monstruosas corporaciones multinacionales que, en su insaciable búsqueda de menores costos y mayor utilidad, han*

implantado un sistema económico dado al aprovechamiento injusto de las debilidades de los países ingenuamente nobles; es la expansión del instinto amoral y predatorio del comercio y del afán monopolista; es una amenaza a los estados nacionales y a la idea misma de soberanía; más que una intimación a los estilos de vida tradicionales es, simplemente, el triunfo del imperialismo norteamericano, el proceso a través del cual se impone al grueso del mundo los gustos y preferencias de las corporaciones gringas; es la destrucción del planeta verde y de los hábitat naturales; es un peligro para la estabilidad laboral y para las uniones obreras; es una transformación perversa de los hábitos familiares de trabajo y ocio; es una restricción de la libertad de escogencia, visto el impacto psicosocial del mercadeo contemporáneo de las megacorporaciones; es, en fin, una fuerza diabólica que, uniforme y penetrante, ha abatido la cultura".

La segunda gran estrategia del neoliberalismo es la privatización de las empresas estatales, en su afán de restarle carga y responsabilidades al Estado. Para ello utiliza la táctica del desprestigio y de la hiperbolización de fallas de las empresas estatales. Cuando tiene la intención de privatizar una empresa determinada, el mismo gobierno neoliberal se encarga de desprestigiarla exagerando y sacando a la luz pública cada una de las fallas y los errores que pueda haber al interior de ella, por insignificantes que sean. Esto lo hace, no con el propósito de combatir la corrupción, como lo pregona, sino con el de predisponer a la opinión pública en contra de la empresa a privatizar. Asimismo, recurre a otras artimañas como: recortarle el presupuesto, reducirle la planta de personal y otras, todas las cuales coadyuvan a un aniquilamiento sistemático y progresivo de la operatividad de la empresa, para darle luego la estocada final vendiéndola a cualquier precio a inversionistas particulares, muchas veces extranjeros.

Cabe referirse aquí a lo que el gobierno entiende como inversión extranjera. En mi profana condición de humanista, lego en asuntos económicos, me atrevo a opinar que una inversión extranjera verdaderamente provechosa para el país donde se efectúa, seria aquella que crease nuevas empresas y, por consiguiente, nuevas fuentes de empleo y de tributación, pero no aquella que solo procede a comprar empresas ya constituidas, generalmente del Estado, pues con ello no se está generando nuevos empleos ni aportando a la nación cosa distinta de lo que ya existía. Y es, precisamente, esta última clase de "inversión extranjera" la que al parecer se está dando en Colombia y que nuestro gobierno nacional defiende y publicita a voz en cuello como de sumo provecho para la nación.

Las privatizaciones traen consigo el encarecimiento de tarifas de los servicios públicos, lo cual se explica por el hecho de que el objetivo principal del inversionista privado es la obtención de un lucro o ganancia, más que el de cumplir una función de carácter social, contrario a lo que ocurre cuando es el Estado el que presta el servicio, puesto que la función primordial de éste es precisamente velar por el bienestar de la sociedad.

Además, cuando el Estado deja todo en manos de los particulares, suele suceder que, con el correr del tiempo, aquél pierde el control de la situación, de tal manera que la sociedad queda expuesta a los abusos de aquellos empresarios de escaso o nulo sentido ético y de poca sensibilidad social o altruismo. Esta situación se hace aún mucho más patética cuando los servicios privatizados son la salud y la educación, dos renglones sociales que para todo Estado o gobierno responsable deben ser inalienables, por cuanto representan la garantía de la vida física y espiritual de la sociedad. Y, sin embargo, en un estado neoliberal la salud y la

educación terminan, tarde o temprano, quedando en manos de particulares, fuera de toda responsabilidad o injerencia estatal.

La tercera estrategia utilizada por el neoliberalismo es la descentralización. Bajo el socolor de que cada región se hará más eficiente y próspera, opta el Estado por dejar cada departamento o municipio a su propia suerte, especialmente en materia de transferencia de recursos. El proceso de descentralización que se ha venido imponiendo en el nuestro y otros países no es más que un equivocado intento de imitar el sistema federal de los Estados Unidos, sin tener en cuenta que federalismo y descentralización son dos cosas distintas. Mientras el proceso de federación se da en un sentido que va de afuera hacia el centro, la descentralización, por el contrario, se da en sentido del centro hacia afuera. Esto quiere decir que mientras el federalismo tiende a la unión de lo que está separado, la descentralización tiende a separar lo que está unido. Y cabria preguntar aquí: ¿No se ha probado en todos los tiempos, y se ha aceptado, que la unión es mejor que la separación? Entonces, ¿por qué habría que desunir lo que ya está unido?

Este es el error en que han caído históricamente las dirigentes de nuestra nación cuando, en procura de establecer un sistema político-administrativo similar al de los Estados Unidos, no han hecho más que promover, con el nombre de federalismo, un proceso de descentralización, con resultados desastrosos para nuestro país, particularmente en lo que respecta a la soberanía y a la estabilidad social. De ahí que esta especie de "federalismo", corno se sabe, no gozase de las simpatías de hombres tan lúcidos e importantes en la historia de nuestra patria como Antonio Nariño, Simón Bolívar, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, entre otros, por cuanto ellos supieron percatarse de lo funesto que para la unidad y el desarrollo armónico de la nación resultaría un esquema político-administrativo de esta naturaleza, tal como había ocurrido, por ejemplo, en tiempos de la Patria Boba y como ocurriría, décadas más tarde, durante el Período Radical (Estados Unidos de Colombia) por allá en la segunda mitad del siglo XIX.

Y es que no se puede esperar otra cosa de un proceso que, corno la descentralización, se empeña en dejar cada entidad territorial abandonada a su propia suerte, sin considerar si cuenta o no con los medios y recursos necesarios para hacerse autosuficiente como se pretende, pues es innegable que mientras existen regiones naturalmente ricas, las hay también que son naturalmente pobres. Por eso se hace necesario que haya un Estado central que acopie y redistribuya, con criterio de justicia social y de igualdad, las riquezas nacionales a las distintas regiones o provincias.

Esta estrategia de la descentralización utilizada por el neoliberalismo está indudablemente en consonancia con lo que a nivel individual pretende hacer este modelo con cada persona, esto es, que cada quien se las arregle como pueda (la ley de la selva o del más fuerte aplicada a la sociedad en todo sentido y con toda su fiereza. Pero, paradójicamente, va en contravía de la globalización que el mismo neoliberalismo propulsa a nivel mundial, puesto que, al pretender hacer del mundo una aldea, la globalización supuestamente busca la unificación y la eliminación de barreras geográficas y de cualquier otro tipo, en tanto que la política de descentralización tiende, a nivel interno de cada nación, a la desintegración del territorio, propiciando así el regionalismo y el aislamiento provincial.

Tal es el verdadero espíritu o esencia del modelo neoliberal, denominado también "reaganismo" o "tatcherisrno", por haber sido Ronald Reagan y Margaret Tatcher quienes, en

calidad de Presidente de los Estados Unidos y Primera Ministra de Inglaterra, respectivamente, decidieron adoptar como política de estado el sistema monetarista formulado por la escuela de Chicago.

Afortunadamente, ya la mayoría de los pueblos latinoamericanos se ha dado cuenta de cuáles son los verdaderos designios de este calamitoso modelo de explotación mercantil y ha decidido darles la espalda a sus máximas expresiones prácticas: el ALCA y el TLC. Por eso hemos visto cómo en los comicios presidenciales de los últimos años han venido triunfando en diversas naciones del Continente candidatos de tendencia social y de izquierda, es decir, antineoliberales.

Ya los países europeos, en su casi totalidad, lo habían hecho, de tal suerte que hoy por hoy en Europa, salvo contadísimas excepciones, se le ha dado también la espalda al neoliberalismo y predominan, por el contrario, los regímenes de propensión socialdemócrata.

En Colombia, sin embargo, nos hemos rezagado desafortunadamente en este sentido, y, tras el frustrado intento de Ernesto Samper por enderezar el rumbo, hemos recaído, ¡y, al parecer, muy profundo, por lo que se ve!, a menos que la ciudadanía despierte y opte por elegir para la Presidencia a algún candidato de verdadera tendencia social, que se decida a revisar la implantación del actual modelo económico de desarrollo, de catadura endiabladamente neoliberal, reemplazándolo por uno menos utilitarista y más humano: un modelo endógeno y autogestionario, que surja de nuestra propia realidad y diseñado por nosotros mismos, sin intervenciones ni imposiciones foráneas.

Este nuevo modelo no tiene por qué ser ni exclusivamente de carácter socialista, ni exclusivamente capitalista, sino más bien una conjunción simbiótica de ambos sistemas, donde el Estado, por una parte, no renuncie a sus responsabilidades sociales, y, por otra, garantice la propiedad privada y la competencia comercial en la medida en que ni la una ni la otra atenten contra el bienestar común de la sociedad: un sistema humanista que les fije límites tanto al latifundio como a los monopolios.
El sistema de gobierno que mayormente, hoy por hoy, reúne tales condiciones es indudablemente la socialdemocracia, concebida en términos de una verdadera tercera vía, que conjugue la libertad empresarial y comercial con las responsabilidades éticas del Estado y del sector privado mismo para con todos los estratos de la sociedad.

Si alguna pista de origen extranjero fuera necesario admitir, sin duda la más aconsejable, por la cercanía y similitud de intereses, seria el proyecto político bolivariano plasmado en la nueva Constitución de Venezuela. Allí se recogen los mismos anhelos e ideales del pueblo raso, que tanto en Venezuela como en Colombia y el resto de los países latinoamericanos son los mismos. Por eso, en caso de que de algún proceso de paz se derivase la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, es incuestionable que la lectura y análisis de la Carta Magna del vecino y hermano país de Venezuela le facilitaría en gran medida su importantísima labor.

De esa manera, podríamos los colombianos contar con una Constitución más representativa de los intereses populares; una Constitución que, por ejemplo, les fije límites al monopolio y al latifundio, corno lo hace la de Venezuela; una Constitución que le devuelva al Estado su verdadero papel y las atribuciones que le corresponden y en vez de declararlo impotente frente a la corrupción e ineficiencia de sus propias empresas (como lo hace la del 91 al

consagrar la privatización de éstas), le prescriba y exija el cumplimiento de su deber de moralizar dichas empresas y hacerlas más productivas y competentes; una Constitución, en fin, que no sea pro-neoliberal.

Tal vez estemos todavía a tiempo de enderezar el rumbo y abandonar el camino del infierno.

*_Licenciado en Filosofía y Letras; colombiano, oriundo del departamento del Cesar, y residente en la ciudad de Barranquilla, donde ejerce las cátedras de Humanismo y Expresión en la Universidad Metropolitana._